El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

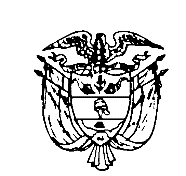
**TEMAS: REDOSIFICACIÓN DE LA PENA / NO PROCEDE PARA RECLAMAR UN MAYOR DESCUENTO PUNITIVO DESPUÉS QUE EL FALLO HA QUEDADO EN FIRME / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / EXCEPCIONES.**

… en la actualidad la sentencia proferida en contra del señor EGCS se encuentra en firme, por cuanto la misma no fue objeto de recurso alguno, lo que implica que respecto de ella opera el principio procesal de la inmutabilidad o irreformabilidad de la sentencia, el cual señala que una vez la decisión ha quedado en firme, al juzgador que profirió el fallo le está vedado revocar o reformar la misma; sin embargo, dicho principio tiene una serie de excepciones en virtud de las cuales el fallador de instancia puede subsanar errores involuntarios en los que haya incurrido al momento de proferir el fallo, siempre y cuando el acto de corrección no vaya a afectar o mutar la estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Es por esa razón que tradicionalmente se ha establecido que los equívocos susceptibles de corrección, serían: a) El error aritmético; b) El error en el nombre del procesado; y c) La omisión sustancial en la parte resolutiva de un tema tratado en la parte motiva del fallo.

Con base en lo anterior, y recordando que lo pretendido por el apelante es que la pena impuesta por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, sea modificada concediéndole un mayor descuento al que le fuera reconocido en la sentencia condenatoria proferida en su contra dada su aceptación de cargos, es claro que no estamos frente a ninguna de las hipótesis planteadas como excepciones para que el juez de primer nivel proceda a modificar su sentencia después de ejecutoriada, lo que traería consigo una clara imposibilidad de parte de la A quo para pronunciarse de fondo respecto a lo pedido por el señor EGCS, por cuanto ya perdió competencia para modificar de manera alguna la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2014, la cual, sobra decir que en la actualidad se encuentra en firme.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

****

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA DE DECISIÓN PENAL**

Magistrado Ponente:

**MANUEL YARZAGARAY BANDERA**

**AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA**

Pereira, doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Aprobado por acta No. 374

Hora: 8:15 a.m.

|  |  |
| --- | --- |
| Radicación: | 6668260 00 048 2014 00353 02 |
| Acusado: | EGCS |
| Delito: | Trafico, fabricación o porte de estupefacientes agravado |
| Asunto: | Apelación auto niega redosificación de la pena. |
| Procede: | Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Función de Conocimiento de Pereira |

**V I S T O S:**

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el reo **EGCS**, en contra del auto proferido el día 27 de noviembre de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, el cual no accedió a una petición de redosificación de las penas que le fueron impuestas por ese mismo Juzgado, al haberlo encontrado responsable de la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

**A N T E C E D E N T E S:**

El día 18 de diciembre de 2014 el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de esta ciudad impuso declaró la responsabilidad penal del entonces Procesado EGCS, por incurrir en la comisión del delito de tráfico, de estupefacientes agravado, razón por la que fue condenado a purgar una pena de 224 meses de. Dicha sentencia condenatoria quedó ejecutoriada toda vez que contra ella no se interpuso recurso alguno.

Ya en la etapa de ejecución de la pena, el señor EGCS presentó una solicitud en la que deprecaba la modificación de la pena que se le había impuesto, en razón de ello y por no tratarse de una redosificación de pena por aplicación del principio de favorabilidad por la expedición de una ley posterior, el conocimiento del asunto quedó a cargo del Despacho que profirió la sentencia condenatoria, esto es el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado esta ciudad y no del Juez encargado de la vigilancia del cumplimiento de la sanción impuesta.

Como sustento de su pedido, argumentó el sentenciado que en atención a lo establecido en el artículo 301 del estatuto penal, y teniendo en cuenta que su aceptación de cargos se había dado desde la imputación, el Juez de instancia debió descontarle una cuarta parte de la pena a imponer por el delito cometido, tal como lo señala el artículo 351 ibídem, y no rebajarle solo el 12.5% como se indicó en la sentencia proferida en su contra; razón por la cual consideró que se le deben descontar 32 meses más como parte de la rebaja de pena a que tiene derecho por la aceptación de cargos, pues el no hacerlo así vulnera sus garantías constitucionales.

**EL PROVEÍDO RECURRIDO**

El Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado, mediante proveído adiado el 27 de noviembre de 2018 decidió negar la modificación de la pena pedida por el condenado, explicando para ello, que tal como se dejó plasmado en la sentencia condenatoria, lo que procedía en este caso al tenor de lo regulado en el parágrafo del artículo 301 del C.P.P; modificado por la Ley 1453/11, era aplicar una rebaja de ¼ parte del beneficio de que trata el artículo 351 ibídem, toda vez que la captura del señor EGCS se dio en situación de flagrancia, lo que implica que ese 50% de que trata el art. 351 del C.P.P. para los casos de aceptación de cargos en la imputación, se debe dividir entre cuatro (4) cuando la captura del procesado se da en situación de flagrancia, dando como resultado una rebaja máxima del 12.5%, como se hizo en la sentencia, por tal motivo lo solicitado por el peticionario no está llamado a prosperar, pues la norma no dice que deba concederse una rebaja de ¼ parte de la pena impuesta para el delito imputado, como erradamente lo entiende el peticionario, que quien es capturado en flagrancia, tendrá derecho solo a descuento de una cuarta parte del beneficio de que trata el artículo 351 del C.P.P. Así las cosas, concluyó el Despacho que no existe yerro alguno en la tasación de la pena que se hizo en la sentencia condenatoria, y por ende no le asiste razón al peticionario cuando afirma que se le adeuda un descuento adicional de 32 meses de prisión.

**LA ALZADA**

El condenado, quien fue notificado de la decisión el día 6 de diciembre de 2018, interpuso recurso de alzada el día 13 de diciembre de la misma anualidad ante el Despacho de primer nivel. En el escrito, el recurrente reitera los argumentos expuestos en la solicitud que fuera declarada impróspera, además, insiste en que por haber él aceptado los cargos que le fueron endilgados por la Fiscalía durante la audiencia de imputación, tiene derecho a que se le descuente un cuarto de la pena a imponer por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, por el que fuera condenado, razón por la cual afirmó que se le debe un descuento excedente de 32 meses que el Despacho le dejó de reconocer en la sentencia condenatoria, por tal motivo deprecó que se redosifique la sanción por haberse realizado de manera desproporcionada y desconociendo además, lo reglado por el artículo 301 del C.P.P. modificado por la Ley 1453 de 2011.

**PARA RESOLVER SE CONSIDERA:**

**COMPETENCIA:**

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 33 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito Especializado que hace parte de este Distrito judicial.

**PROBLEMA JURÍDICO:**

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Fue correcta la interpretación que el Juzgado de primer nivel le dio a los artículos 301 y 351 del C.P.P. para decidir no redosificar la pena impuesta al procesado de otrora?

**SOLUCIÓN:**

Sería del caso proceder a resolver el problema jurídico acá planteado, sino fuera porque revisado el expediente avizora la Sala la existencia de una situación que impide hacer tal cosa, situación que además desde la presentación de la solicitud impedía que el Juzgado de primer nivel se pronunciara frente a lo pedido por el señor EGCS.

Para sustentar lo que se acaba de afirmar, se hace necesario partir de la base de que en la actualidad la sentencia proferida en contra del señor EGCS se encuentra en firme, por cuanto la misma no fue objeto de recurso alguno, lo que implica que respecto de ella opera el principio procesal de la inmutabilidad o irreformabilidad de la sentencia, el cual señala que una vez la decisión ha quedado en firme, al juzgador que profirió el fallo le está vedado revocar o reformar la misma; sin embargo, dicho principio tiene una serie de excepciones en virtud de las cuales el fallador de instancia puede subsanar errores involuntarios en los que haya incurrido al momento de proferir el fallo, siempre y cuando el acto de corrección no vaya a afectar o mutar la estructura o esencia de la sentencia o la ratio decidendi de la misma. Es por esa razón que tradicionalmente se ha establecido que los equívocos susceptibles de corrección, serían: a) El error aritmético; b) El error en el nombre del procesado; y c) La omisión sustancial en la parte resolutiva de un tema tratado en la parte motiva del fallo.

Con base en lo anterior, y recordando que lo pretendido por el apelante es que la pena impuesta por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, sea modificada concediéndole un mayor descuento al que le fuera reconocido en la sentencia condenatoria proferida en su contra dada su aceptación de cargos, es claro que no estamos frente a ninguna de las hipótesis planteadas como excepciones para que el juez de primer nivel proceda a modificar su sentencia después de ejecutoriada, lo que traería consigo una clara imposibilidad de parte de la *A quo* para pronunciarse de fondo respecto a lo pedido por el señor EGCS, por cuanto ya perdió competencia para modificar de manera alguna la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2014, la cual, sobra decir que en la actualidad se encuentra en firme.

Sobre este principio y las excepciones que le caben al mismo, de antaño la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“En virtud del principio de irreformabilidad de las sentencias consagrado en el artículo 211 del estatuto procesal penal, esta clase de decisiones judiciales no son susceptibles de ser modificadas ni revocadas por el órgano que las ha proferido, salvo que contengan un error aritmético, una imprecisión en el nombre del procesado, o una omisión sustancial en la parte resolutiva, en cuyos eventos la norma lo autoriza para hacer la enmienda o adición respectiva, oficiosamente o a instancia de los sujetos procesales…”[[1]](#footnote-1).

Línea de pensamiento que se ha mantenido vigente como bien se desprende del siguiente precedente jurisprudencial:

“Pues bien, constituye principio procesal universalmente reconocido que las providencias que le ponen fin a un proceso, no pueden ser modificadas por quienes las profirieron. Así lo establece el estatuto procesal penal que rige el caso (Ley 600 de 2000.

(…)

Sin embargo, cuando en dichas providencias se incluyen algunos errores u omisiones formales, que no afectan en su esencia o sustancia la decisión tomada, se permite que el funcionario que la dictó entre hacer las correcciones necesarias, bien de oficio o a solicitud de parte.

La finalidad del procedimiento de corrección de las sentencias es, en palabras del profesor Redenti, “... la simple rectificación de un desliz material involuntario (lapsus calami)”. En concepto del mismo profesor, esa corrección se diferencia de la reforma de la providencia en desarrollo de los recursos que caben contra ella, en cuanto que, en el evento de la corrección «la sentencia rectificada persiste sustancialmente en firme, semper eadem: en el segundo caso, se tendrá por otra sentencia, que servirá para determinar con su propia autoridad la suerte de la impugnada».

El sistema procesal penal que rige el caso sólo consagra en el ya citado artículo 412 mecanismos de corrección para remediar errores meramente formales en la elaboración de las sentencias que, como ya se advirtió, no pueden afectar la esencia de lo ya pronunciado.

Así, estipula la norma que el juez podrá aclarar errores aritméticos, o del nombre de las personas a que se refiere la sentencia, y adicionar la misma por omisiones sustanciales en la parte resolutiva…”[[2]](#footnote-2).

Conforme con todo lo anterior, resulta evidente que al Juzgado *A quo*, le estaba vedado el pronunciarse sobre lo pedido por el declarado penalmente responsable, por tratarse básicamente de una petición de reforma a una sentencia condenatoria que ya había cobrado ejecutoria.

Siendo así las cosas, se podría concluir que ante la falta de competencia que le asiste al Juzgado de primer nivel para pronunciarse frente a lo pedido por el reo, la misma recaería sobre los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, quienes acorde con lo reglado en el artículo 38 C.P.P. adquieren la competencia una vez que se encuentra en firme el fallo condenatorio. Pero pese a ser ello cierto, de igual manera se debe tener en cuenta que los Juzgados encargados de la vigilancia de la pena, también se encuentran sujetos al principio de inmutabilidad de la sentencia condenatoria, lo cual quiere decir que ellos tampoco pueden modificar la esencia del fallo, salvo en las hipótesis de la aplicación del principio de favorabilidad[[3]](#footnote-3) o en aquellos eventos en los cuales la norma en la que se cimentó la condena haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia[[4]](#footnote-4), circunstancias excepcionales estos que en ningún momento se acomodan a la petición deprecada por el Condenado EGCS, la cual, como ya se dijo, no perseguía otra cosa diferente que la modificación de un fallo que se encontraba en firme.

Ahora bien, si lo que perseguía el Condenado romper la inmutabilidad e irrevocabilidad del fallo, considera la Sala que debió acudir a alguna de las causales de la acción de revisión, las cuales fueron diseñadas para esa finalidad, o sea para tumbar las repercusiones del principio de la cosa juzgada sobre una sentencia que se encuentre ejecutoriada o en firme.

Con base en lo que se ha dicho en precedencia, considera la Sala que no es posible hacer un pronunciamiento respecto a lo pedido por vía de alzada por el apelante, porque la Colegiatura carece de competencia para poder fungir como *Ad quem,* debido a que si quien cumple las funciones de *A quo* carecía de alguno de los factores que le otorgaban competencia para pronunciarse sobre cierto tópico, es obvio que dicha mácula se extiende hacia el *Ad quem.*

A pesar de lo que se ha dicho atrás, la Sala quiere hacer una anotación respecto a lo aquí pedido, de tal suerte y al ser evidente que el recurrente dentro de este asunto no tiene claro cuáles son los elementos que se analizan a la hora de conceder descuentos punitivos por allanamiento a cargos en casos de captura en flagrancia, se hace necesario hacerle una breve explicación del tema, para empezar, y aunado a lo que se dijo en precedencia, hay que recordar que es el art. 351 del C.P.P., el que nos habla de las modalidades de terminación temprana del proceso penal y nos ilustra sobre cuál es la rebaja de pena a la que accede una persona por aceptar durante la audiencia de imputación su responsabilidad penal en la comisión de un delito, señalando que tal disminución de la punitiva podría llegar a ser hasta de un 50% de la sanción dispuesta para el delito endilgado, sin que con ello se quiera decir que a todos los imputados que acepten cargos se les tenga que conceder una rebaja de la mitad de la pena, pues lo que nos señala la norma en cita, es que puede ser ese porcentaje o uno menor, teniendo el Juez en cada caso particular que analizar las circunstancias particulares del hecho para establecer el descuento, que en todo caso no podrá superar ese 50%.

En consonancia con lo anterior, se tiene que el artículo 301 del C.P.P. al describir en qué consiste la flagrancia, señala en su parágrafo que cuando una persona es capturada en tal situación y decide aceptar cargos durante la diligencia de imputación, solo podrá hacerse acreedor de un descuento de una cuarta parte de la rebaja establecida en el art. 351 de esa misma norma.

Lo anterior quiere decir que cuando una persona que ha sido capturada en situación de flagrancia cometiendo un delito, al ser llevada ante un juez de control de garantías decide allanarse a los cargos que el Ente Acusador le endilga, no tendrá derecho a que se le conceda un descuento punitivo de hasta el 50% de la pena a imponer como lo establece el art. 351 del C.P.P., sino que solo tendrá derecho a que se le reconozca como máximo una cuarta parte de ese 50%, lo que es lo mismo que decir que tiene derecho a una rebaja de máximo 12.5 del total de la pena a imponer, puesto que, se insiste, el art. 301 del C.P.P. así lo establece en su parágrafo.

De tal suerte, resulta evidente que ese parágrafo del que se viene hablando es el que malinterpreta el recurrente, o más bien, el que lee solo hasta donde le conviene, por cuanto considera que cuando este habla del descuento de ¼ parte, lo hace refiriéndose al total de la pena a imponer por el delito o delitos imputados, o lo que sería lo mismo que decir que ese descuento es del 25% del total de la sanción, sin observar lo que dice a renglón seguido la norma, esto es, que esa rebaja de la cuarta parte es sobre el descuento que concede el art. 351 del C.P.P., dejándose con ello claro que no es sobre el 100% de la pena a imponer, sino que cuando hay captura en situación de flagrancia y se presenta el allanamiento a cargos en la audiencia de imputación, el “premio” para el delincuente, es simplemente una rebaja de la cuarta parte de la mitad de la sanción penal.

Lo que viene diciéndose, encuentra respaldo jurisprudencial en pronunciamientos tanto de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, siendo quizá, una de las más relevantes, la radicada bajo el No. 38285 del 11 de julio de 2012 en donde la CSJ dijo: «*De tal manera, si la intención del legislador, dentro del poder de configuración, fue la de reglar la rebaja de pena derivada del estado de flagrancia, teniendo como fundamento que esa particular situación ofrece sin mayor dificultad los medios de prueba que permiten la emisión, por regla general, de un fallo condenatorio, (…)».* En ese mismo sentido, se tiene la sentencia C-645 de 2012, por medio de la cual la Máxima Guardiana de la constitución, declaró exequible en contenido del art. 57 de la Ley 1453 de 2011, indicando que:

“Tal medida, prima facie, no desconoce el principio de igualdad al establecer esa limitación de los beneficios para las personas sorprendidas en flagrancia, porque como se ha expresado profusamente, no es equiparable su colaboración para reducir el desgaste del Estado, frente a aquella persona que, voluntariamente adelanta la misma actuación, sin existir dicha flagrancia.

En consecuencia, según el legislador, acorde con la jurisprudencia reseñada, los beneficios punitivos no pueden ser equiparables entre el individuo sorprendido en flagrancia y aquel que no lo es, cuando hay allanamiento o aceptación de cargo y preacuerdos o negociaciones, toda vez que en el primer evento el eventual desgaste de la administración de justicia en principio resultaría siendo menor.”

Con base en todo lo que se ha dicho hasta el momento, esta Sala de decisión se inhibirá de desatar la apelación interpuesta por el reo EGCS, de acuerdo a lo dicho en precedencia, respecto a la imposibilidad que existe de que el Juzgado pudiera pronunciarse de fondo sobre la petición realizada por el condenado respecto a que se modifique la sentencia condenatoria proferida en su contra, ello por las razones ya expuestas.

Finalmente, como quiera que el condenado EGCS está recluido en un establecimiento carcelario que no se encuentra en este Distrito Judicial, a fin que sea notificado personalmente del contenido de esta decisión, se comisionará, por el termino de 5 días más el de la distancia, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (Reparto) de la Dorada, para que proceda en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **INHIBIRSE** de desatar el recurso de apelación interpuesto por el reo **EGCS** en contra de la providencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Pereira, el día 27 de noviembre de 2018, en virtud del cual fue negada la redosificación de la pena solicitada por el condenado,ello por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

**SEGUNDO:** Comisionar por el termino de 5 días más el de la distancia, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (Reparto) de la Dorada, para que proceda a notificar personalmente al condenado **EGCS** del contenido de esta decisión.

**TERCERO:** Declarar que en contra de la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades legales.

**CUARTO:** Una vez en firme la presente decisión, por Secretaría se procederá a la inmediata devolución de las actuaciones al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

**MANUEL YARZAGARAY BANDERA**

Magistrado

**JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE**

Magistrado

**JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ**

Magistrado

1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintitrés (23) de septiembre de 1998. Rad. # 10341. M.P. FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2.007. Proceso # 25799. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. [↑](#footnote-ref-2)
3. # 7º del artículo 38 C.P.P. [↑](#footnote-ref-3)
4. # 9º del artículo 38 C.P.P. [↑](#footnote-ref-4)